

tiene en el servicio militar. Considerando: que de autos consta que el promovente fué consignado como soldado á la Batería fija de aquella plaza, sin su consentimiento, lo que importa una infracción expresa del art. 5º de la Constitución general de la República, se decreta: que por sus propios legales fundamentos es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada en 14 del último Mayo por el C. Juez de Distrito de Tampico que declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege al C. Leonardo Isaguirre contra la providencia que motivó el presente recurso.—Devuélvanso las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.—Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*José M. Lozano.*—*J. M. Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*José García Ramírez.*—*Juan A. Mateos*, Secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 3 de 1873.—*Lic. Enrique Landa* oficial mayor.

AMPARO

De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Lic. Victor Covarrubias por su esposa, contra el acto de embargo verificado por la oficina recaudadora de ese Estado, en las rentas de la hacienda de la Cueva, por adeudo de contribuciones.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Lic.

Victor Covarrubias fué requerido en la tarde del Lunes 25 de Noviembre último, por la Recaudación de contribuciones de esta Ciudad para el pago de novecientos treinta y cinco pesos, cuarenta y siete centavos procedentes de contribuciones de la hacienda de la Cueva de la propiedad de la señora su esposa.

Le fueron embargadas las rentas de esa finca y contra ese proceder solicita ser amparado por la Justicia federal, á causa de haberse violado en su persona la garantía contenida en el artículo 16 de la Constitución, que establece que: "Ninguno puede ser molestado en su familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." La incompetencia de la autoridad la deriva el quejoso, de que la legislatura actual se instaló sin *quorum* y el artículo 41 de la Constitución del Estado previene: "Que el Congreso no puede abrir sus sesiones ni ejercer su encargo sin la concurrencia de mas de la mitad del número total de sus miembros." En consecuencia, todos sus actos son nulos. También la hace consistir en que el coronel D. Julio María Cervantes, no puede ser gobernador por que se lo prohíben los artículos 77 y 80 de la Constitución local.

La causa legal del procedimiento no existe en concepto del quejoso por falta del Poder Legislativo para imponer contribuciones y del Ejecutivo para hacerlas efectivas.

Sobre la validez de los actos ejercidos por persona incapaz, han disputado los autores y comentaristas conviniendo algunos en que el error común hace derecho y ocupa el lugar de la verdad.

Era principio de derecho entre los romanos que el esclavo no pudiera ser testigo en un testamento; considerándose sin embargo válido su testimonio cuando por el comun consentimiento era reputado libre. (L. 1º C.

de testament). Pone tamen, quo de Titius testamentum condiderit, et in illo septem testas adhibuerit, quorum unus esset inhabilis, verb. gr. esset surdus, cum tamen probabili communiter reputaretur quero irritabitur ne testamentum?

Respondet quod non, id que favore ultimarum voluntatum; et etiam quia error communis facit jus, et prevaleat veritati. (Gaspar. Institut. Jur. Civili. Pars. secund. Tit. 4º Numero 24).

Esta doctrina se ha hecho extensiva al ejercicio de la autoridad por la célebre ley romana: "Barbarius Philippus," cuya aplicación hemos visto repetidas veces en nuestra época y cuyo texto es como sigue: "Barbarius Philippus, cum servus fugitivus esset, Roma capturam petiit, et Praetor designatus est, sed nihil ei servitutem obstetisse, ait Pomponius, quasi Praetor non fuerit. At qui verum est, pratura cum funtum, et tamen videamus si servus, quamdiu latuit in dignitate praetoria funtus sit: quid dicemus qua edixit, qua decrevit nullius fore momenti? An fore, propter utilitatem eorum, qui apud eum egerunt vel Lege, vel quo alio Jure? Et verum puto, nihil eorum reprobari. Hoc enim humanius est: cum etiam potuit populus Romanus servo decernere hanc potestatem: sed et si servum esse, liberum effecisset. Quod jus multo magis in Imperatore observandum est." (L. 3. Digest. de off. praet).

Si bien se reflexiona la aplicación de los principios contenidos en esta ley, ha tenido lugar sobre hechos consumados, y no sobre los que están pendientes; pareciendo por lo mismo juiciosa la opinión de Vinnio al comentar el párrafo 7º Lib. 2º Tit. 10 de la instituta: "Ridiculum vero est quod vulgo ex hoc loco colligunt communem errorem jus facere: non enim error, sed in errore summa. Principium autoritas jus hoc benigne et speciali favore ultima voluntatis constituit.

El mismo autor explicando la ley del Digesto citada, hace la siguiente distinción:

TOMO IV.—PARTE II.

"Et sic distinguitur ut referat, utrum alieni pública autoritate hujusmodi persona per errorem imposita sit, an quis ipse sibi privatim cum assumpserit: illo casu valere quod gestum est, per L. 3. de off. praet: hoc casu acta non valere, et speciale esse, quod in casu hujus paragrafi testamento succurritur." (Vinnius super institut, Lib. 2º Tit. 10 número 3).

En la Constitución romana al decir de Juliano el juriconsulto, poco importaba que el pueblo expresase su voluntad por palabras ó por hechos, teniéndose el asentimiento general como tácita convención de los ciudadanos: *velut tacita civium conventio*.... Nam quid interest, suffragio populus voluntatem suam declararet, an rebus ipsis, et factis? Quare rectissime etiam illud receptum est ut leges non solum suffragio legislatoris sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur."

Entre nosotros aunque proclamado altamente el dogma de la soberanía del pueblo, de la misma manera que entre aquellos, las consecuencias son mas lógicas. Todos los poderes se derivan del pueblo. El pueblo se gobierna por el pueblo. El pueblo legisla. Al pueblo corresponde reformar sus instituciones. Pero siendo preciso recurrir al sistema representativo, no hay quien ejerza la autoridad sino por el voto, por la confianza y por el consentimiento explícito del pueblo, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución federal y las particulares de los Estados.

Aun cuando el coronel Cervantes y los diputados á la legislatura de Querétaro, puedan alegar en su favor el sufragio público, si es que lo han obtenido, es indudable que siendo la fuente de todo poder la Constitución de un Estado para sus funcionarios, no está permitido al pueblo la arbitrariedad en su elección, ni á aquellos en el ejercicio de sus atribuciones, de manera, que puedan traspasar impunemente los límites de aquellos.

No existiendo los poderes constitucionales sino por la Constitución, no pueden estos dispensarse de su observancia. Una autoridad constitucional cesa por derecho de existir desde el momento que la Constitución no existe, y esta deja de existir en el momento mismo que es violada; el Gobierno que la viola, hace pedazos su título, y desde ese mismo instante subsiste por la fuerza, pero no por la ley. "En resumen, dice un distinguido publicista, ¿que es lo que queda después de haber violado una Constitución? La seguridad y la confianza quedan destruidas; los que gobiernan tienen el sentimiento de la usurpación, y los gobernados la convicción de que están á discreción de un poder que ha traspasado todas las leyes. Cualquier pretexto de respeto por la Constitución, parecen los unos verdadera burla, y el apelar á esta Constitución parecen los otros una hostilidad; en vano aquellos que en medio de su celo poco prudente y sin previsión han concurrido á este movimiento desordenado, quieren detenerlo en sus deplorables consecuencias, porque no encuentran mas puntos de apoyo; estando ya el remedio fuera de las manos de los hombres, rotos los diques y desencadenada la arbitrariedad. Aun teniendo las intenciones mas puras, todos los esfuerzos serán infructuosos, y los depositarios de la autoridad saben que han preparado una espada que no aguarda sino un brazo bastante fuerte para dirigirla contra ellos. El pueblo olvidaría quizá que el gobierno se habia establecido sobre la violación de las reglas que le hacian legítimo; pero este no lo olvida, pues que continuamente esta pensando que se haya siempre en peligro por haberse hecho culpable; y así es que sigue ciegamente el camino que una vez ha tomado, aunque abierto por la injusticia, sin que dependa de él el tomar otro mejor; en fin, sigue el destino de toda autoridad que ha salido de sus límites" (Benjamin Constant, curso de política constitucional, tomo 2º página 241.)

De lo expuesto se deduce rectamente, que no deben considerarse como autoritativos los actos emanados de las personas que ocupan el lugar reservado á los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. También se infiere, que aunque en el acto reclamado hay violación de garantía individual, no viene de mano de autoridad, y por tanto no es reparable por la vía de amparo. Por lo mismo es inalicable la competencia de personas que no tienen título para ser consideradas como autoridades; si no se quiere incurrir en el absurdo de equiparar á los que usurpan el poder con los que estan investidos de él. El artículo 101 de la Constitución, dice á este respecto: "Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite..... Por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales"..... Cuando este artículo pone bajo la salvaguardia de los Jueces federales los derechos del hombre, en el único caso de ser atacados por cualquiera autoridad; el siguiente manda, que la sentencia sea siempre tal, que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose á protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que ver-se el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley ó acto que la motivare. El fallo de V. accediendo á la pretension del actor no podría menos que pecar contra este mandamiento constitucional; supuesto que aunque *pro forma* singular, sería trascendental á todos los miembros de la sociedad queretana y á los intereses de la misma federación, que dejaría de recibir la cuarta parte de la contribucion que se cobra al quejoso, ó al menos se aplazaría indefinidamente la percepción de este impuesto. No hay acción que se justifique por otra regla que por la del interés público. Este es un principio en que todos concuerdan, de donde se deducen dos consecuencias necesarias: que los privilegios, contratos y aun las leyes generales no tienen valor, si cuando nacen son gravemente ofensivas al estado público; otra, que pierden toda su

fuerza en el punto que llegen á serlo; (ley 43 título 18 parte 3ª) "Otrosi decimos, que si el Rey dá privilegio de donacion á alguno é en aquella sazón en que fué dado non se se tornaba en gran daño; é despues aquellos á quien lo el Rey dió, usaren del en tal manera que se torne en daño de muchos comunamente, tal previllejo como este, decimos, que de la hora que comenzó á tornarse en daños de muchos como dijimos, que se pierde, é non debe valer" Y como no puede menos que ser odiosa la exención del pago de contribuciones que se pretende, por interrumpir la igualdad social; la sentencia que la declarase, además de la ley de partida referida, infringirian el artículo 28 de la Constitucion, y es de notarse sobre este punto que el erario perdería para siempre esas sumas; porque las leyes que despues se dieran para recaudarlas, adolecieran del vicio de retroactividad.

Estas consideraciones son bastantes para probar, que no cabe el recurso interpuesto. Preciso es por lo mismo convenir, en que los legisladores de 57 quisieron evitarnos trastornos sociales y un desquiciamiento general, semejante al que hoy sufre el Estado de Querétaro, cuando redactaron el artículo 102 de la Constitucion, y preciso es tambien buscar un remedio mas eficaz á las usurpaciones del poder público que el dilatadísimo de los amparos en virtud del cual se tendría que ir sustrayendo á individuo por individuo de la accion de los usurpadores. En efecto, cuando por un camino directo como por ejemplo el de la acusacion, se conoce de abusos como los de las autoridades de hecho del Estado, el poder legítimo sucede rápidamente al ilegal, y la administracion pública apenas se paraliza, mientras los nuevos empleados ocupan el lugar de los antiguos, la desorganizacion no es sensible, ni produce los tristes efectos de una declaracion, que poniendo en evidencia la nulidad de los poderes, los deja sin embargo funcionando, contentándose con descargar sobre ellos un golpe que siendo me-

ral no puede hacer mella en los que no tienen reparo en barrenar la ley, ni en permanecer al frente de un Estado contra el voto público, el dictamen de su propia conciencia y el testamento de la carta local.—Y este remedio directo se encuentra en la ley de 6 de Diciembre de 1855, que manda proceder criminalmente contra los que se arrogan el poder público de los Estados; siendo de la competencia de los Tribunales federales el conocimiento de este delito; sin que pueda desentenderse de él el Juez de Distrito respectivo, una vez denunciado.—Por lo expuesto, el promotor fiscal pide: 1º se niegue el amparo solicitado; 2º que con testimonio de este expediente se proceda contra los que se han arrogado el poder público del Estado en la via y forma á que ha lugar en derecho.—Querétaro, Diciembre 18 de 1873.—*Luis Castañeda.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Querétaro, Enero 24 de 1873.—Visto el presente recurso de amparo promovido por el C. Lic. Victor Covarrubias en nombre y representacion de su señora esposa, contra el acto del embargo verificado por la oficina recaudadora del Estado en las rentas de la Hacienda de la Cueva, de la propiedad de su citada esposa, cuyo embargo tuvo efecto por aducir á dicha oficina la cantidad de \$977. 47 de contribuciones causadas por la finca embargada y los recargos de cobranza, cuyo recurso ha sido interpuesto por el quejoso á virtud de reputar violada en su persona la garantía concedida al C. en el artículo 16 de la Constitucion general, al ser molestado en su persona y posesiones por autoridad que no es competente y sin existir causa legal que funde y motive el procedimiento, siendo el poder ejecutivo del Estado, de quien depende el ramo de contribuciones, ilegítimo é inconstitucional conforme al artículo 77 de la Constitucion del Estado que prohíbe la re-

eleccion, y ser decretada la ley que estableció 6 autorizó al Ejecutivo para imponer las contribuciones que se le cobran, por una Legislatura que no es verdadera y constitucional, á causa de haber falseado los preceptos del título 6º de la Constitución local, instalándose sin el quorum legal; visto el informe que con arreglo al artículo 9º de la ley de 20 de Enero de 1869 rindió el C. Recaudador de contribuciones, como autoridad ejecutora del acto reclamado, en el que manifiesta deberse abstener de tratar la cuestion política, por referirse ella á los poderes del Estado, que segun el quejoso han violado la Constitución y quienes por consecuencia deberán resolverla, limitándose tan solo, como lo hizo, á exponer y adjuntar á su informe las disposiciones legales en que fundó sus procedimientos; visto el pedimento del Promotor fiscal; las pruebas rendidas por el quejoso y las pedidas por el Promotor á la Legislatura del Estado, y por último, los alegatos respectivos.

Considerando: que la incompetencia alegada por el quejoso á pesar de ser absoluta, á causa de no reconocer autoridad ninguna legal en el Ejecutivo y Legislativo del Estado, ni natural ni conferida, por impedirlo preceptos constitucionales, si reconoce en ellos los medios para decretar impuestos y hacerlos efectivos como aparece en el presente caso; razon por la cual este juzgado dió entrada y continuó segun sus trámites legales este recurso, sin poder tenerse en consideracion, por lo mismo, las razones alegadas por el Promotor en su pedimento de fojas 30.

Considerando: que siendo la base y fundamento de este juicio la incompetencia objetada al Ejecutivo y Legislativo del Estado, para decretar impuestos, por no ser constitucionales dichas autoridades, es indispensable examinar primero, si deben considerarse comprendidas en el espíritu del artículo 16 de la Constitución general, y segundo, si su eleccion es constitucional y legítima.

Considerando: respecto del primer punto, que la falta de competencia alegada, como se ha dicho, siendo absoluta, no reconoce en ellas sino el mero hecho de resistir, pero sin poder 6 autoridad para gobernar y poner en ejecucion las leyes, es decir, sin competencia; y estableciendo el artículo 16 de la Constitución que nadie puede ser molestado en su familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento &c, es evidente que el presente caso debe tenerse como comprendido en el artículo constitucional, que no distingue la clase de *competencia* á que el se refiera, sino que habla de una manera absoluta.

Considerando: en cuanto al segundo punto, que de las pruebas rendidas por el quejoso, resulta plenamente probado 1º: que el C. Julio M. Cervantes, fué declarado Gobernador constitucional del Estado por la Legislatura del mismo, en 28 de Noviembre de 1867 (fojas 95.) 2º: que en 30 de Junio de 1870, fué declarado igualmente Gobernador Constitucional, en virtud de la convocatoria expedida por el Gobierno general, al mismo C. (fojas 69;) y 3º: que en 31 de 1871, fué asimismo declarado Gobernador Constitucional el propio C. (fojas 41 y 58.)

Considerando: que previniendo el artículo 77 que ni el Gobernador ni el Vice-Gobernador puedan ser reelectos sino hasta el año 4º despues de haber cesado en sus funciones. Entendiéndose tambien, que el primero no puede ser reelecto para lo segundo, ni el segundo para lo primero, (fojas 40 y 47), es claro que al haber sido declarado Gobernador Constitucional del Estado el C. Julio M. Cervantes, por la Legislatura en 31 de Octubre de 1871, se infringió palpariamente el artículo citado de la constitucion local, por haber concluido el periodo constitucional el 1º de Octubre de 1871, segun el artículo 78 de la propia constitucion, en cumplimiento de cuyo precepto se pro-

cedió á hacer la eleccion de Gobernador en el citado año de 1871. Que existiendo en la eleccion del Gobernador del Estado un vicio constitucional tan claro, su nombramiento no puede tenerse como legítimo, al estar prevenido en el artículo 41 de la Constitucion general, que el pueblo ejerza su soberanía por medio de los poderes de la Union en los casos de su competencia, y por los de los Estados para lo que toca á su régimen interior, en los términos respectivamente establecidos en la Constitucion federal y las particulares de los Estados, las que en ningun caso podrán contravenir á las estipulaciones del pacto federal; así pues, de admitir como legal tal declaracion, sería infringir el artículo citado destruyendo al mismo tiempo por su base, el sistema representativo popular garantizado á la Nacion por el pacto federativo, (art. 109.)

Considerando por último, respecto al poder ejecutivo, que al exigirse el pago de contribuciones por la oficina respectiva, se verifica dicho acto en delegacion del Ejecutivo; y adoleciendo este de un vicio constitucional, no puede tenerse como la autoridad competente para exigir dichos impuestos la oficina referida.

Considerando: con relacion á la Legislatura del Estado, que si bien es cierto que el artículo 36 de la constitucion local, previene el que los Distritos se alternen en el uso de la facultad que les concede el artículo 35, que es la de nombrar otro diputado si resultare una fraccion que excediere ó llegare á la mitad de la base de poblacion para poder elegir representantes, y que así mismo está probado en autos, que el Distrito de Amecameco eligió dos diputados á la Legislatura anterior, y en la actualidad existen igualmente en la Legislatura dos diputados por el mismo Distrito, sin que por lo tanto se hubiese cumplido con el precepto que establece el artículo 36 citado; es igualmente cierto que no se fijó por la autoridad respectiva, al hacerse la convocatoria para las elecciones, el Distrito que habia de go-

zar las prerrogativas del artículo citado, y que una vez electo conforme al artículo 40 de la constitucion local, que es el correlativo del 60 de la constitucion federal, á la Legislatura tocaba únicamente calificar la eleccion y resolver la duda que en el caso existiese; resuelta esta, no puede considerarse á ese cuerpo, instalado sin el quorum legal, al haber estado presente á dicho acto tan solo los cinco representantes del distrito del centro y los dos de Amecameco, número indispensable para formar quorum.

Considerando por último: que en el presente caso no puede tenerse como atacada la soberanía garantizada por la Constitucion general á los Estados, al examinarse si existe violacion de garantía, pues dicha soberanía se encuentra restringida por la constitucion, que impone á los Estados la forma de Gobierno republicano representativo popular, garantizando así los derechos del hombre que son la base y objeto de la institucion. (artículo 1º de la Constitucion general.) Por estas razones, y con fundamento de los artículos 16, 40, 41, 60, 101, 102, 109 y 126 de la Constitucion general y de la ley de 20 de Enero de 1869, definitivamente fallando, se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Lic. Victor Covarrubias, contra el acto de embargo que por pago de contribuciones verificó el recaudador de ellas, en las rentas de la Hacienda de la Cueva. Hágase saber á las partes; sáquense las copias respectivas de esta sentencia para su publicacion, y elévense estos autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para los efectos legales, previniendose antes al actor reponga con el sello correspondiente, el papel comun invertido.

El C. Lic. Victor de la Peña, Juez de Distrito del Estado, así lo decretó, mandó y firmó.—Doy fé.—*Victor de la Peña.*—Ante mí,—*Francisco Ruiz.*

Es copia. Querétaro, Enero 27 de 1872
Francisco Ruiz, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 10 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Querétaro, por el Lic. Victor Covarrubias en representación de su esposa, contra el acto de embargo verificado por la oficina recaudadora de dicho Estado, en la renta de la Hacienda de la Cueva por adeudo de contribuciones, alegando el quejoso, que con este acto se viola la garantía á que se refiere el artículo 16 de la Constitución federal, en virtud de haber sido expedidos los decretos que establecen las contribuciones por el Gobernador y la Legislatura de dicho Estado que no ejercen autoridad legítima; y considerando: que los quejosos alegan como causa de ilegitimidad respecto de la Legislatura que se instaló sin que hubiera el número de Diputados necesario para formar *quorum*; y respecto del Gobernador, que el C. Julio M. Cervantes, fué declarado Gobernador contra lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución del Estado, que prohíbe la reelección: y que á este punto debe limitarse la resolución del amparo solicitado: que la Legislatura se instaló con siete Diputados, número que forma el *quorum* de ella; que si en las elecciones de Diputados por el Distrito de Amecameco hubo vicios, constando que realmente fueron electos por tal Distrito, solo á la Legislatura del Estado toca como cuerpo electoral, calificar y apreciar estos vicios; que si al hacerse la declaración de Gobernador, la Legislatura infringió el artículo 77 de la Constitución del Estado, esta infracción por sí sola no puede ser objeto de amparo de garantías sino de apreciación de la misma Legislatura como cuerpo electoral. Por todas estas consideraciones y de acuerdo con lo prevenido en el artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869 se declara: 1º: Que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Querétaro que amparó al quejoso. 2º: La Justicia de la Unión no ampara ni protege

al Lic. Victor Covarrubias, contra el acto de embargo que por pago de contribuciones verificó el recaudador de ellas en la renta de la Hacienda de la Cueva. Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazón.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José M. Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Najera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Anzures.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 26 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México por Refugio Quintanar, contra su consignación al servicio militar.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor dice: que el presente juicio de amparo fué promovido por Magdalena Alvarez á nombre de su marido Refugio Quintanar, quejándose de que el mes de Octubre de 1871, fué tomado de leva y destinado al servicio militar contra su voluntad, violándose el art. 5º constitucional por este motivo y además porque es casado. Recibido el juicio á prueba ninguna produjo el quejoso, mas restablecido el orden constitucional, desde entonces si existe la violación de la garantía reclamada, por lo